

## ENSAYO

### Un Debate de Desencuentros \*

George J. Stigler

La controversia entre conservadores y progresistas<sup>1</sup> en los Estados Unidos es tan ineficaz que no sirve como controversia. La calidad de la controversia no sólo es baja, sino que, de hecho, está declinando, y lo que una vez fue un debate significativo ahora se está volviendo un completo desencuentro. Un debate de desencuentros es sólo una afrenta a la inteligencia social. Intento culpar a ambos partidos por este fracaso y procuro contribuir al debate en relación con varios temas básicos. Debido a que yo soy indudablemente conservador y mi imparcialidad es sólo una esperanza, ustedes deberían estar advertidos contra esa eterna y no siempre intencional estratagema: el replantamiento de un problema de una forma tal que tenga un solo lado defendible.

Se ha puesto de moda el uso de la palabra "extremista" para caracterizar a una persona y su posición en asuntos públicos. Una palabra como ésta se usa menos para describir una posición que para deshacerse de ella.

Un punto de vista extremo es aquel que es suficientemente diferente de los aceptados por la mayoría, como para que pocas personas sostengan opiniones más distantes aún. El propósito de etiquetar a un individuo como extremista es poner sus puntos de vista fuera del ámbito de discusión; éstos son simplemente demasiado absurdos para merecer la atención de las personas normales. Un extremista es un lunático intelectual, al cual se le permite andar suelto si no es violento, pero que no tiene acceso a la conversación común.

\* *The citizen and the State*, the University of Chicago Press, Chicago, 1975. Traducido y publicado con la debida autorización.

<sup>1</sup> "Liberáis". El lector notará que este uso del término es opuesto al del texto anterior, en el cual "liberal" corresponde al sentido clásico y europeo del vocablo. Este propio trabajo aclara el sentido de la palabra "conservador" en la política de los Estados Unidos. (Nota del Editor).

Hay mérito en excluir al lunático de la discusión. Si un hombre me dice que es Napoleón, o para el caso, Josefina, la discusión no tendría sentido. Si una persona afirma que la Corte Suprema está llena de comunistas leales pero bien disfrazados, no me interesa perder tiempo con él. Ocasionalmente, el disidente solitario con un punto de vista absurdo demostrará tener la razón: un Galileo con un esquema mejor del universo; un Babbage con un computador factible. Sin embargo, si escucháramos a cada lunático completa y cuidadosamente, estaríamos perdiendo mucho tiempo y esfuerzo. Siempre que no hagamos callar al lunático pacífico, dejamos abierta la posibilidad de que pueda convencer a otros de que tiene razón.

Si hay un lunático en un pueblo, habrá cien en una ciudad y miles en un país. Pero ellos no compartirán los mismos puntos de vista: cada uno será excéntrico a su manera. Un grupo de personas compartirán una opinión común sólo porque comparten creencias objetivas comunes y aceptan las mismas relaciones causales. Ellas deben tener procesos lógicos tolerablemente razonables para llegar a una posición común. Mientras más grande sea el grupo, más seguros podemos estar de que no es "insano" en el sentido de estar divorciado de hechos aparentes y razonamientos verosímiles.

Si un grupo minoritario rechaza una verdad demostrable, como cuando yo no permito que mi hijo pequeño sea vacunado, la mayoría puede recurrir a la coacción o, de lo contrario, abandonar la discusión racional. Sin embargo, esta es una sanción extrema y es defendible sólo si se dan dos condiciones: la mayoría debe estar absolutamente convencida de la corrección de su punto de vista y la minoría equivocada debe ser muy pequeña. Una mayoría decente debe tener un fuerte sentido de autodisciplina y practicar un renunciamiento del poder, excepto bajo las condiciones más urgentes e inequívocas.

Esto no quiere decir que los grupos grandes no puedan estar equivocados con respecto a sus realidades o no puedan tener razonamientos erróneos. Incluso las mayorías pueden estar tristemente equivocadas en ambos aspectos. Sin embargo, la forma de enfrentar el error es mediante el uso de una cuidadosa evidencia y un razonamiento correcto. Podemos estar seguros de que un grupo grande no es misantrópico ni es mentalmente incapaz de pensar en forma sensata, de modo que se dispone de las bases de la persuasión racional. El uso de la fuerza, o incluso del ridículo, en general, es ilícito en el trato con grupos. Quien cree en la democracia, o, incluso digámoslo en forma más básica, quien cree en la dignidad del hombre, tiene la obligación moral de intentar deponer las diferencias de opinión entre los grupos mediante un argumento honesto.

No estoy afirmando que tenga que haber un elemento de verdad en la posición de cada minoría y que debemos extraer

este elemento. Existen puntos de vista compartidos por las minorías que considero equivocados, por ejemplo: el punto de vista que sostiene que deberíamos tener aranceles proteccionistas para un gran número de industrias en los Estados Unidos. Sin embargo, una cosa es rechazar un punto de vista, y otra negarse a discutir en detalle y con buena voluntad la evidencia en la que éste se basa.

El tema del extremismo es, por decirlo así, la forma extrema del problema del debate entre los progresista y los conservadores de Estados Unidos. Ninguna de las dos posiciones parece ser capaz de entender a la otra. Lo más serio del problema es que ninguno de los dos partidos parece entender realmente la posición del otro —compartir los mismos temores, alimentar las mismas esperanzas o considerar la misma evidencia—. Es como un diálogo entre dos personas, en el que ambas usan las mismas palabras, pero con distinto significado. Permítaseme actuar de intérprete. La discusión se limitará a asuntos económicos.

Comencemos con el problema más fundamental planteado por el creciente control de la vida económica por parte del Estado: la preservación de la libertad individual, libertad de expresión, de trabajo, de elección del lugar de residencia y de educación.

Actualmente la situación es la siguiente: todos están de acuerdo en que la libertad es importante y deseable; casi nadie piensa que hoy en día se violan seriamente algunas de las libertades básicas. Los conservadores creen que la continuación de la tendencia hacia un control político creciente sobre la vida económica, inevitablemente, conducirá a una mayor disminución de la libertad. Los progresistas creen que esta eventualidad es remota y evitable. Los progresistas más maliciosos señalan que los conservadores han estado hablando durante décadas de la siembra de las semillas de destrucción de la libertad, quizás las semillas sean infértiles. En estos términos, la libertad no es un tema viable de controversia; ninguno de los dos lados toma el problema en forma seria.

El hecho de no haber tenido ninguna sensación de pérdida de libertad durante las dos últimas generaciones con un creciente control político sobre la vida económica no constituye, por supuesto, una prueba concluyente de que hemos conservado toda nuestra libertad tradicional. El hombre tiene una capacidad sorprendente para adaptarse a circunstancias negativas.

Un observador no puede negar que las restricciones a las acciones de los individuos han aumentado con la expansión del control público sobre nuestras vidas. Yo no puedo construir una casa que le disguste al inspector de edificación. No puedo enseñar en las escuelas de los cincuenta estados porque carezco de licencia, a pesar de que puedo enseñar en sus universidades.

Esta lista de los controles sobre las personas puede multiplicarse muchas veces, pero no convencerá a los progresistas de que las libertades esenciales están disminuyendo. Los progresistas señalarán que las restricciones impuestas a un hombre pueden significar la libertad para otro. El inspector de edificación que me obliga a construir en una cierta forma está protegiendo a mis vecinos de un incendio o de la contaminación. La ley que me impide enseñar en una escuela secundaria por lo general mantiene a los incompetentes fuera de la sala de clases. Las restricciones impuestas a un hombre, dicen los progresistas, son una concesión de libertad para otro.

Claramente vemos que el debate es incoherente: dos grupos hablan sin entenderse uno a otro. Existe un problema y debería enfrentarse: ¿ha limitado la anterior expansión de los controles gubernamentales el ejercicio de nuestras libertades? Y si lo ha hecho, ¿a cuáles de ellas y en qué medida? El peso recae honradamente sobre los conservadores. Si dicen que las subvenciones federales a la educación conducirán al control federal de nuestras escuelas, deberían dar alguna prueba. ¿Qué ha ocurrido en las áreas educacionales, en las cuales el gobierno federal, o, para el caso, el Estado ha estado actuando desde hace tiempo? Dicen que el programa agrícola quita al agricultor la libertad de elección de ocupación y debilita su iniciativa e independencia. Luego de treinta años de práctica de este programa se debería disponer de alguna prueba objetiva. La plática de las semillas de destrucción es mera indolencia que se las da de profecía.

Un segundo fracaso sorprendente de comunicación es el problema del bienestar individual. El conservador académico está dedicado a un sistema de precios eficiente. Este sistema de precios dirigirá los recursos a sus usos más importantes, eliminará a los empresarios ineficaces, inducirá a perfeccionar la tecnología y contribuirá en otras formas a un mayor producto nacional. Muchos programas llamados de bienestar interfieren en el funcionamiento de este sistema de precios y los conservadores se oponen a ellos. Una ley de salario mínimo constituye una interferencia directa en este sistema de precios en el mercado de servicios de mano de obra, y los subsidios al trigo constituyen una interferencia similar en el mercado de productos alimenticios; y los conservadores dicen que se debería terminar con ambas interferencias.

Al progresista le parece excesiva la preocupación de los conservadores con respecto a la eficiencia. El progresista ve una familia numerosa mantenida por un obrero mal pagado y afirma que una economía tan rica como la nuestra está en condiciones de pagarle un poco mejor. El progresista vio la quiebra de la familia campesina en 1933 producida por el colapso de nuestra economía y siente que no es legítimo someter nueva-

mente a los agricultores a los huracanes de la adversidad económica. Un progresista bien educado no expresa abiertamente sus dudas sobre la buena voluntad del conservador, pero es difícil creer que no sospeche que el conservador tiene más amor a las ganancias que a las personas.

Me atrevo a afirmar que el conservador es de verdad un amigo del hombre, pero que considera el bienestar en una forma menos personal y restringida que el progresista. Cuando se sube el precio del trigo mediante un plan de restricción de cosechas, cualquiera puede observar el beneficio para el dueño de la granja, y es este beneficio el que capta la atención del progresista. El conservador se preocupa de otros dos efectos del plan de restricción de cosechas: se ha gravado con un impuesto a todos los consumidores de pan y el plan de restricción casi inevitablemente conducirá a cierta pérdida de recursos o, dicho de otra manera, reducirá el ingreso real de la comunidad. Estos efectos son obviamente perjudiciales para quienes no son agricultores. La oposición de los conservadores a la legislación del salario mínimo es más directa: dicha legislación daña a algunos de los trabajadores peor pagados al forzarlos a ocupaciones con salarios incluso más bajos que los legales, una de las cuales es la desocupación.

La preferencia del conservador por precios bajos, fuertes incentivos al esmero, el ahorro y el ingenio, y por atributos similares de eficiencia y progreso, tiene, en efecto, una ventaja considerable con respecto al plan de los progresistas de asistencia a ciertos grupos necesitados. Existen muchos, muchos grupos necesitados en una sociedad y algunos tardan una generación, dos o incluso tres en captar la atención de los progresistas, ya sean reformadores o políticos. Los progresistas comenzaron a preocuparse por las personas con problemas de vivienda en las ciudades de Estados Unidos hace unos pocos años. Durante los últimos 300 años, la empresa privada tenía la exclusiva responsabilidad de mejorar sus viviendas. Los progresistas esperan dedicar una atención especial a los afectados por la pobreza en Appalachia en 1966 —observen la fecha—, pero ignorarán a las decenas de otros grupos de igual o mayor necesidad hasta que alguien dé publicidad a sus necesidades. Los programas de los conservadores tienen por objetivo ayudar a todos, incluso a los grupos demasiado pobres como para tener un agente de prensa.

Estas observaciones pretenden ilustrar una proposición general: la oposición de los conservadores a la intervención, ya sea del gobierno o de un monopolio privado, generalmente está planteada desde el punto de vista de la eficiencia, pero siempre podría ser replanteada desde el punto de vista del bienestar, y especialmente del bienestar de los consumidores. Un conservador puede ser verdaderamente humano. Es justo decir que los conservadores son compasivos con la gran masa de la población que

se ve moderadamente afectada por cada política del sector público; mientras que los progresistas son compasivos con el grupo identificable y determinado, que se ve más beneficiado o perjudicado por la política en cuestión.

Me inclino a sostener aquí que a los progresistas se les debería pedir que trabajaran más por la coherencia de ambos partidos en el debate. Si el guijarro de la política del sector público envía ondas perjudiciales a toda la economía, éstas deberían ciertamente considerarse antes de decidir si lanzar o no el guijarro. Si para hacer 50 dólares de algo bueno en un lugar, debemos hacer 30 ó 70 dólares de daño en alguna otra parte, por lo menos deberíamos tener conocimiento de este daño.

Sin embargo, esto no es todo con respecto a la posición conservadora. Supongamos que deseamos ayudar a un cierto grupo de agricultores o a los habitantes de los barrios bajos o a una comunidad azotada por un desastre. A menudo es posible —de hecho, generalmente es posible— idear políticas que impongan un mínimo de daño a otros grupos, o que trasladen este daño a un grupo conocido capaz de soportarlo. Por ejemplo, en nuestro caso del programa agrícola podemos elegir entre subvenciones directas de ingresos que no conduzcan a una pérdida de recursos o, como en la actualidad, a un plan de restricción de cosechas que sí pierde recursos. Podemos financiar los beneficios otorgados a los agricultores cobrando más por el pan o mediante los ingresos por impuestos generales. Puedo añadir que ningún economista que se encuentre fuera de la política activa defenderá el programa agrícola actual, ya sea progresista o conservador.

Seré tan absurdamente imparcial como para observar la respuesta a esta discusión por parte de un progresista imparcial. Es verdad —dirá él—, nosotros, los progresistas, hemos prestado muy poca atención a los efectos de nuestras políticas sobre las personas que no se encuentran en condiciones de enviar un representante a las audiencias del comité del Congreso. A ustedes, conservadores, les reconocemos que tienen humanidad, y en lo sucesivo consideraremos los efectos indirectos de nuestras políticas. Sin embargo, ¿negarán que los conservadores se opusieron a la seguridad social, a todos los programas de agricultura, a los de renovación urbana, al reciente proyecto de ley antipobreza y así sucesivamente... ? ¿No han estado los conservadores demasiado preocupados por los costos indirectos y difusos de los programas como para dar la importancia debida a sus beneficios directos e inmediatos para los grupos seriamente afectados?

Después de reflexionar sobre esto, me inclino a dar dos respuestas. La primera es que el aumento de los ingresos per cápita (en precios de 1964) desde aproximadamente 500 dólares en 1875 a US\$ 2.600 en la actualidad, constituye una medida de la

inmensa benevolencia implícita en un sistema de empresa privada, y este aumento no sólo ha hecho más por eliminar la pobreza que todas las políticas gubernamentales ideadas, sino que, de hecho, también ha financiado estas políticas. La segunda respuesta es: *touché*.

Existen dos problemas concernientes a la competencia del Estado, que dividen a los conservadores y progresistas. Uno consiste en la capacidad del Estado de oponerse a intereses especiales, y el otro, en su capacidad de lograr que se hagan las cosas. En términos generales, estos problemas se suman a la siguiente pregunta: ¿hace el Estado cosas que no debiera y deja de hacer las que debiera?

Todos admitirán que el Estado interviene en algunos campos simplemente porque un grupo bien situado políticamente desea ayuda. El sistema de cuotas para la importación de petróleo se puede atribuir a un solo argumento: en el Congreso hay poderosos representantes de los pocos estados que poseen yacimientos petrolíferos. Nuestra historia de los aranceles es el mismo cuento contado muchas veces. La continuación del programa agrícola en su escala y alcance actual sólo se puede atribuir a los votos de las áreas agrícolas. La lista de tales aventuras políticas puede extenderse considerablemente.

Los conservadores sostienen que estos programas revelan la vulnerabilidad del proceso político a la explotación por parte de ciertos grupos. La vulnerabilidad es mayor mientras mayor sea el papel del gobierno en la vida económica: si a las industrias textiles y petrolíferas se les ha otorgado cuotas de importación, es difícil negar estas cuotas a la industria de la carne (1964) y a la de automóviles de Canadá (1965). La historia sugiere a los conservadores que la forma de combatir estos abusos es mediante una ordenanza de autolimitación: el Congreso debe negarse a jugar el papel de ayudar a industrias particulares o a ciertas localidades.

La respuesta de los progresistas es doble. Su respuesta menor es que muchos de los programas no son tan malos como se dice: el programa agrícola por ejemplo, no ha excluido a todos los agricultores pobres de su lista de beneficiarios. Su respuesta más importante es la siguiente: no podemos negarnos a usar un arma de bienestar público simplemente porque a veces se abusa de ella. No podemos suprimir los martillos debido a que también son usados como armas contundentes.

El fracaso para ponerse de acuerdo sobre los problemas resulta obvio si preguntamos cómo nos desharemos de políticas, sobre las cuales personas informadas y desinteresadas concuerdan en que son indeseables. Los conservadores responden que deberíamos tratar firmemente de no tener ninguna política de ese tipo: crear, o más bien volver a crear una tradición convincente de no intervención de parte del Congreso en la importación de

bienes particulares, la fijación de precios de determinados bienes y así sucesivamente. Los progresistas responden que debemos educar a la mayoría de la población hasta el punto en que comprendan las objeciones a las políticas indeseables e instruyan a sus representantes para que se opongan a ellas.

A un catedrático le es muy difícil negar la conveniencia de usar la educación para obtener políticas ilustradas. Sin embargo, la historia no sugiere que ello sea un remedio rápido para los abusos de ciertos grupos. El nivel de educación formal de nuestra población ha aumentado constantemente durante un siglo y ha alcanzado niveles sin precedentes históricos. Probablemente en nuestra población hay más años de educación que los que registra la historia del mundo hasta 1925. Si la educación del público conduce a una menor perversión del proceso político por parte de ciertos grupos, deberíamos ser capaces de detectar esta tendencia en la legislación. La tendencia se inclina penosamente hacia la otra dirección: la legislación en favor de intereses especiales ha aumentado a lo largo del siglo XX. Los progresistas le deben a la sociedad, y también se deben a sí mismos, el comenzar a pensar en formas eficaces para contener el ejercicio del poder económico del Estado.

El segundo problema consiste en la eficacia con que el Estado ejerce sus funciones económicas. ¿Acaso la regulación de los precios de ferrocarriles los mantiene en un nivel adecuado? ¿La revisión de la emisión de nuevas acciones protege al inversionista de pérdidas? ¿La revisión de la veracidad de la publicidad protege a los consumidores? ¿El servicio federal de mediación reduce la frecuencia o la duración de las huelgas? ¿La revisión de nuevas drogas salva vidas humanas?

Les pido que acepten algo extraño. Nadie sabe la respuesta a preguntas de este tipo. A lo sumo, sólo un pequeño conjunto de políticas ha sido estudiado con un cuidado siquiera moderado. A los conservadores no les ha parecido necesario documentar sus acusaciones con respecto a los errores, ni a los progresistas documentar sus afirmaciones de éxito.

El último tema que discutiré a propósito de este debate incoherente es el problema de la aptitud del individuo. La situación es la siguiente: los progresistas consideran que el individuo está perdiendo constantemente la capacidad de enfrentar los problemas planteados por una sociedad industrial en avance. Antes, el consumidor podía mirar los dientes de un caballo, pero, ¿cómo califica la calidad de un automóvil? También compraba fréjoles por libras, pero ¿cómo sabe qué hay en la caja de fréjoles, parcialmente llena, la que también puede contener iridio o, tal vez, Pepsodent?

Los conservadores tienen varias respuestas a esto. Una, que sólo mencionaré, es la siguiente: aunque los progresistas no sepan comprar un auto, los conservadores sí saben. Una segunda

respuesta más general indica que es fácil exagerar las dificultades. Incluso una persona sin conocimientos de mecánica puede saber por su propia experiencia y la de sus amigos si un determinado fabricante de automóviles produce habitualmente autos seguros, durables y confortables. Y, en todo caso, la responsabilidad es buena para el hombre.

Esto también constituye un tema sobre el cual no hay acuerdo, el que tiene una clara analogía con el problema de la competencia del Estado. Consideremos en primer lugar ese sentimiento viril: un hombre debería tomar sus propias decisiones porque esto mejora su carácter y lo incita a ampliar sus conocimientos. Esto es tan obviamente verdadero como evidentemente falso. Al carácter de un hombre no le hace mucho bien que le vendan alimentos impuros, que le extirpe el apéndice un doctor incompetente o que lo choque un camión con los frenos malos. Por otra parte, si a un hombre se le permite tomar decisiones sólo cuando las decisiones imprudentes no tienen consecuencias serias, es, en realidad, difícil creer que la experiencia hará las veces de educadora.

La situación se complica en la práctica por las diferencias existentes entre los hombres en cuanto a su habilidad para enfrentar determinados problemas. Por ejemplo, el crédito a plazo es, en general, un beneficio para toda la comunidad: permite a las personas mejorar su pauta de consumo en el tiempo. Sin embargo, algunas personas son desesperadamente incompetentes para resistir los halagos de los vendedores o incluso para entender los contratos que celebran. ¿Cuántas de estas personas tendrá que haber antes de que se regulen las ventas a crédito para protegerlas y, desgraciadamente, para hacer, entonces, la vida más compleja y cara para el resto de la comunidad?

Sin embargo, la pregunta más importante relativa a la aptitud individual es realmente muy distinta: ¿qué tan bien opera nuestra economía? Por medio de dos ejemplos espero demostrar que este es realmente el núcleo del problema.

El primero se refiere a la venta de alimentos en envases que dan una impresión exagerada de sus contenidos, por ejemplo: la caja parcialmente vacía de cereales para el desayuno. Supongamos que es cierto que los consumidores no pesan el contenido ni leen las pequeñas letras impresas que incluyen esta información. Entonces, existe otra fuente de protección para el consumidor: los competidores de la compañía involucrada en este tipo de envasado. Si los consumidores compran el envase semivacío por el mismo precio que los envases llenos, los competidores comenzarán a disminuir los contenidos y reducir el precio, puesto que, naturalmente, sus costos de producción habrán bajado y estarán ansiosos de aumentar las ventas. Esta competencia continuará hasta que el precio de los contenidos por unidad sea lo que era antes de que surgiera esta idea. Si las

personas fueran tan tontas como dicen los progresistas, las cajas de cereales para el desayuno eventualmente estarían vacías, pero se venderían por el precio marcado en ellas.

En todos los casos en que la ignorancia de los consumidores, trabajadores o inversionistas es explotada por parte del comerciante, la mayor protección de los primeros la constituyen los competidores del segundo. No necesito estar bien informado, puesto que si alguien intenta beneficiarse a costa de mi ignorancia, sus esfuerzos sólo estimularán a sus rivales a proporcionar el producto a un precio competitivo. La competencia es el santo protector del consumidor.

Sin duda, la competencia no siempre existe, y precisamente por eso es que Estados Unidos tiene una política antimonopolio para combatir a los monopolios y las conspiraciones de compañías nominalmente independientes. Sin embargo, la queja que comúnmente se hace en cuanto a la incapacidad del mercado para proteger a los consumidores, trabajadores e inversionistas, rara vez se dirige a los monopolios, sino más bien al hecho de que no existen las fuerzas de la competencia, o que éstas son demasiado débiles, o actúan en una forma demasiado lenta. Los progresistas no han hecho un buen trabajo para demostrar ni la rentabilidad, ni la frecuencia del fraude y el engaño. Se han contentado con atenerse a incidentes escandalosos y argumentos a priori. La defensa de la competencia por parte de los conservadores también ha sido demasiado teórica: la elegante teoría económica que describe un sistema competitivo ha sido muy poco elaborada desde el punto de vista estadístico.

Existe un segundo recurso para una persona no experta en un mundo complejo: puede contratar a un experto. Si yo deseo un televisor que funcione bien, puedo comprarlo en una tienda grande y acreditada, la que tiene como uno de sus principales servicios, ciertamente, el detectar bienes de buena calidad haciendo las veces de mi representante, y garantizar su calidad. Si deseo educar a mi hijo, puedo pagar una universidad para asegurarme de que sus profesores están capacitados. Nuestra economía está simplemente colmada de instituciones que se especializan en proporcionar conocimientos y que, en alguna forma, garantizan la exactitud de los conocimientos.

El surgimiento de instituciones que entregan información especializada no resuelve completamente el problema de la información. Mi profesor, Frank H. Knight, solía decir que para poder elegir al mejor médico, una persona tendría que saber cuántos conocimientos de medicina tiene cada médico, y si esta persona supiera tanto, entonces sabría lo suficiente como para tratarse a sí misma. ¿Cómo puedo saber si mi tienda es digna de confianza y si la universidad realmente buscará y conseguirá buenos profesores?

No puedo estar "seguro" de estas cosas, tal como no puedo estar "seguro" de que una agencia del gobierno estará dotada de hombres competentes. Sin embargo, el tiempo está de mi parte. Estas agencias especializadas tienen vidas bastante largas, de modo que puedo juzgarlas por los resultados. Marshall Field y mi universidad han estado vendiendo aparatos y seleccionando profesores, respectivamente, durante muchos años, por lo que puedo predecir razonablemente bien cómo actuarán en los próximos años. La reputación por entregar un buen servicio durante largos períodos constituye el activo más valioso de una agencia que proporciona conocimientos, y yo puedo estar seguro de que incluso los comerciantes y los presidentes de universidades que andan a la caza de dólares lucharán firmemente por conservar esta reputación.

Estos ejemplos domésticos no pretenden dar una respuesta a la acusación de que el individuo está perdiendo capacidad para tomar sus propias decisiones. Pretenden sugerir que una economía de empresa privada posee los poderosos recursos de la especialización y la competencia para ayudar al consumidor, al trabajador y al inversionista. Constantemente surgen nuevos problemas para el individuo en una sociedad moderna. Los progresistas no tienen ningún derecho a suponer que el individuo está incapacitado para afrontarlos; los conservadores no tienen ningún derecho a suponer que el mercado protegerá al individuo automáticamente.

Es inquietante reflexionar sobre estos cuatro serios problemas: la preservación de la libertad, el trato humanitario a los necesitados, la aptitud del Estado y la aptitud del individuo, y observar en cada caso el fracaso de los polemistas para ponerse de acuerdo en la solución de los problemas. Es inquietante, porque tanto los progresistas como los conservadores son honestos, inteligentes y patrióticos. No hay villanos en la película. Sobre todo es inquietante el hecho de que el buen humor y la buena voluntad de los participantes del debate están declinando. El intelectual tiene la gran responsabilidad de restaurar la lógica y el respeto mutuo en la discusión.

La coherencia del debate, y la recopilación y análisis de las grandes cantidades de información que yo he pedido, no eliminarán las diferencias de opinión sobre la política del sector público. Todavía tendremos personas en desacuerdo con respecto a los papeles comparativos de la responsabilidad individual y la benevolencia social. Por mucho que multipliquemos nuestras investigaciones, habrá problemas prácticos y teóricos pendientes que permitirán seguir políticas alternativas. Sin embargo, un efectivo encuentro en el debate debiera poner en perspectiva nuestras controversias y mejorar nuestras políticas. Lo necesitamos.